Capítulo 1

Los dominicos y el clero regular en el arzobispado de México frente a la política eclesiástica de Felipe V*

RODOLFO AGUIRRE SALVADOR*

La política eclesiástica de Felipe V y su crítica al clero regular

La primera mitad del siglo XVIII presencié varias transformaciones en cuanto a política eclesiástica en el Imperio español que indirectamente influyeron en un cambio de equilibrio de poder entre el clero regular y el secular del arzobispado de México. A raíz de la Guerra de Sucesión Española, varios factores se conjugaron para modificar el estado que hasta entonces había guardado la Iglesia, tanto en España como en Indias. En la historiografía ha sido poco estudiada la política eclesiástica de Felipe V en Indias, opacada por el mayor interés en las reformas de Carlos III. Incluso sigue aceptándose que el cambio de dinastía no implicó transformaciones importantes con respecto a la época de los

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIIT IN400413, “La Iglesia y la conformación sociopolítica de Nueva España: redes parroquiales, jerarquías eclesiásticas y actores sociales”.

** Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México.

austria¹. Sin embargo, esta idea debe reexaminarse pues, al menos en lo concerniente a las cuestiones eclesiásticas, pueden advertirse signos reformistas. Nuevas investigaciones sobre el reinado de Felipe V han venido a reforzar la idea de que se iniciaron cambios importantes, de diferentes magnitudes e intensidades que van dejando atrás la antigua tesis de que todo siguió igual (Serrano, 2004). Uno de los aspectos en donde se aprecia mejor esa transición es el de la política eclesiástica (Barrio, 2002). Varios autores han señalado en los últimos años la serie de fricciones entre el nuevo régimen, el clero español y el papado (Pujol, 1995 y Cortés, 2004).

Al terminar la Guerra de Sucesión, el gobierno de Felipe V comenzó a insistir en la reforma del clero como consecuencia del heterogéneo apoyo del clero peninsular, sobre todo del asentado en Aragón, Valencia y Cataluña (Barrio, 2004, pp. 47-62). De ahí que el gobierno de Madrid fue muy sensible a las cuestiones eclesiásticas, no solo de España sino también de Indias, algo que se reflejó en la actuación de algunos obispos que nombró para la Nueva España (Aguirre, 2011, p. 478). En los años y décadas siguientes, se siguió discutiendo el papel del clero y la Iglesia en el Imperio español, y en especial el del clero regular, dadas sus fuertes ligas con el papado. Uno de los ministros reales que sobresalió en todo ello fue el fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, quien en un largo parecer solicitado por la Corona, el famoso Pedimento de 1713 (Macanaz, 1841), ventiló duras críticas a ambos cleros, que le valieron a la larga su destierro del Imperio, más sus propuestas no fueron olvidadas. En su escrito, Macanaz señaló que el Estado eclesiástico tenía la obligación de contribuir con sus personas y su riqueza a la defensa del reino y a las necesidades de la Real Hacienda, sin que se necesitare de bula o breve de por medio, poniendo como ejemplo “que en los reinos de Aragón, Valencia, Navarra y principado de Cataluña, que han conservado sus cortes generales hasta ahora sin asenso ni rescripto apostólico, se les ha gravado a los eclesiásticos y seculares indistintamente”. En el punto 47 y en el

1 Véase por ejemplo, “Nueva España: los años de autonomía” (Hausberger y Mazín, 2010).

48, Macanaz afrontó el asunto del clero regular en España, señalando que su número era excesivo al igual que su concentración de bienes, la cual discrepaba con la pobreza de las parroquias que administraban y que esa riqueza “estancada”, provocaba la falta de recursos para más seminarios en que se pudieran formar buenos eclesiásticos.

Por todo ello, Macanaz planteó al Consejo de Castilla las siguientes reformas en las religiones: que a los conventos y casas se les permitiera tener solo rentas moderadas y fijas, que los frailes obedecieran estrictamente sus reglas, que se redujera el número de conventos y que con las rentas sobrantes se fundaran o se invirtieran en hospitales, orfanatorios, casas de misericordia y seminario para clérigos. Como es posible apreciar, Macanaz fijó una serie de ideas que gradualmente fueron retomadas para la reforma del clero regular en el Imperio español. En esta nueva etapa de intentos de reforma en España, confluyeron problemáticas propias de la Iglesia novohispana en general y del arzobispado en particular, confluencia que ocasionó un ambiente político adverso a las órdenes religiosas. En efecto, durante la primera mitad del siglo XVIII se vivió una transición en la vida eclesiástica del arzobispado de México que cambió el equilibrio de poder entre ambos cleros, a favor del secular². No hubo un cambio radical sino más bien una reorientación que fue tomando fuerza a medida que transcurrieron los años.

Los dominicos en el arzobispado de México a principios del siglo XVIII

Durante el reinado de Felipe V, la Orden de los Predicadores seguía conservando en la jurisdicción arzobispal una red importante de establecimientos, si bien por detrás de franciscanos y agustinos; se trataba de 28 doctrinas y cuatro misiones, además, del convento imperial de la ciudad de México.

2 Para una visión de conjunto de este período véase: Rodolfo Aguirre Salvador, *Un clero en transición. Población clerical, cambio parroquial y política eclesiástica en el arzobispado de México, 1700-1749* (2012).

Poco se había alterado esa red desde el siglo XVI en cuanto a su número. No obstante, al igual que en la mayoría de doctrinas y curatos seculares, el cambio social y el aumento demográfico iniciado a mediados del siglo XVII impulsaban cambios en la organización parroquial en mayor o menor medida. En ese sentido, la eclosión de las haciendas fueron factores importantes. En la doctrina dominica de Chimalhuacán, provincia de Chalco, por ejemplo, para 1640, empezaron a abundar bautizos de naturales nacidos en las haciendas de: Atlapanco, Atempa, Atocpa, Nepantla, Iztactepec, Tenanzulco y poco menos en los ranchos de San Miguel, La Pastoría, Cuilatitlan, Los Pastores, Mezquique, Tlalaman, Teocalco o Quauhnextitlan; en contraste, el número de habitantes en varios pueblos de visita disminuyó, como: Caltecuya, Mamalhuazuca, Tepecoculco y Tepetlixpa (Jalpa, 2008, p. 73). Al parecer las haciendas y ranchos siguieron al margen de la organización parroquial como unidades de fieles, pues en 1676, los dirigentes dominicos reclamaban al virrey obligar a los hacendados a cumplir con sus obligaciones pecuniaras por la administración espiritual de sus dependientes:

[...] en los partidos que administra mi religión hay obrajes y haciendas de labor y ganado, pobladas de muchos españoles, negros y mulatos, y en ellas se ocupan y asisten los más naturales, se hace trabajosa la administración [...] sin que los muchos de dichos obrajes y haciendas paguen derecho alguno a los religiosos y así es imposible [...] acudir a tanto y tan crecido trabajo adonde no hallan ninguna compensación (AGN, de Soto, 1676ca, ff. 68-68v).

Pero si los dominicos tenían sus preocupaciones por asimilar en sus doctrinas a todos los habitantes en aumento de haciendas y ranchos, los arzobispos de la primera mitad del siglo XVIII tuvieron sus propios objetivos respecto al clero regular bajo su jurisdicción. José Lanciego y Eguilaz, arzobispo de 1712 a 1727, por ejemplo, se caracterizó por hacer presente a la Corona las deficiencias en la administración de las doctrinas por los religiosos, por un lado, y las necesidades del clero secular, por el otro. Así, entre 1715 y 1720 ese prelado se dio a la tarea de inspeccionar personalmente el estado que guardaban los curatos y doctrinas del arzobispado, tarea inmensa por cuanto sumaban más de

230 cabeceras parroquiales (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f.). Lanciego buscó, ante todo, establecer la primacía de la jurisdicción ordinaria por sobre la del clero regular, sus usos y costumbres en el manejo de derechos parroquiales, matrimonios o cofradías. Una de las mayores preocupaciones de Lanciego durante su recorrido, y de donde se desprendieron varias acciones con respecto a los doctrineros, encargados de los principales asentamientos indígenas, fue conocer las deficiencias que en el conocimiento de la doctrina cristiana tenían los naturales, criticando la labor de los mismos:

[...] hemos visto por nuestros ojos con grande dolor de nuestro corazón, en diferentes parajes, especialmente de haciendas, ranchos, obrajes y pueblos cortos, que muchos adultos y aún casados no saben persignarse, ya por su rudeza, ya por la poca frecuencia que los curas y ministros tienen con los fieles para instruirlos en la doctrina cristiana (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 57v).

Para enmendar todo ello, Lanciego ordenó a los curas establecer en cada curato una hora fija para que se enseñara a los fieles la doctrina por un maestro especialmente designado, así como el establecimiento de escuelas de enseñanza del castellano, un antiguo deseo de la Corona y que ahora el arzobispo volvía a retomar, considerando que la conservación de las lenguas indígenas eran un verdadero obstáculo para una mejor y definitiva evangelización (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 14v). Sin dejar de realizar las acciones acostumbradas en tales recorridos —visita a la iglesia parroquial, sus instalaciones, su sacristía, ornamentos y archivo, así como confirmaciones— el prelado fue muy insistente en apuntalar su aparato judicial a nivel local mediante jueces. Igualmente, revisó todas las licencias de los frailes para poder celebrar y confesar, mostrando así la autoridad que la mitra tenía sobre los religiosos con cura de almas.

En el mismo sentido, Lanciego advirtió a los religiosos que se abstuvieran de celebrar misas a discreción, insinuando que ello aumentaba los pagos de los indios a la Iglesia (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 43). En la misma tónica, el prelado pidió a varios religiosos tener cuidado con lo que cobraban en las sepulturas de los indios o con las

confesiones, disfrazadas de “ofrendas” (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 276v). Igualmente, el arzobispo cuidó de apuntalar la presencia del clero secular en las doctrinas, dándoles las licencias necesarias para que tuvieran también participación en la administración espiritual en partidos dominados tradicionalmente por frailes³ (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 8v). Por ello, no dejó pasar la oportunidad de llevar a su lado a un clérigo lengua o traductor para examinar a los indios fiscales de las iglesias locales, demostrando a los religiosos que en el clero secular también había ese tipo de expertos (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 46). Pero si los prelados buscaban acrecentar la presencia del clero secular en las regiones del arzobispado, el régimen de Felipe V influyó también, buscando parte de las rentas eclesiásticas, en cambiar el equilibrio entre ambos sectores de la Iglesia en la arquidiócesis de México.

El impacto del subsidio eclesiástico en las relaciones mitrareligiosos⁴

El subsidio eclesiástico fue un gravamen a las rentas eclesiásticas del Imperio español que se originó en la era de los reyes católicos, cuando Roma les autorizó a cobrarlo como ayuda extraordinaria para la guerra contra los moros (Rouco, 2001, pp. 201-232). Los reyes posteriores, especialmente Felipe II, se encargaron de renovar esa concesión pontificia sistemáticamente, a tal punto que pronto se consideró una partida de la Real Hacienda. El proyecto de imponer el subsidio en América surgió en la década de 1670, bajo Carlos II, el cual solo se pudo concretar hasta 1699, cuando el papa Inocencio XII lo concedió

3 “Se despachó licencia al bachiller don Francisco de la Peña, presbítero para que en los idiomas castellano y otomí en los partidos de este arzobispado que se administran en dichos idiomas, pueda confesar generalmente hombres y mujeres por el tiempo de la voluntad de su Señoría Ilustrísima” (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 8v).

4 Este apartado se basa en el artículo “Frailes a la defensiva: la imposición del subsidio eclesiástico en el arzobispado de México a principios del siglo XVI-II” (Aguirre, 2013-2014).

al fin (AGN, Bienes Nacionales, leg. 500, exp. 1). Mediante un breve se autorizó a Carlos II recaudar un millón de ducados de plata de todas las diócesis de América. Ello significó que tanto clérigos como religiosos, monjas e incluso las obras pías y rentas de cofradías a cargo de seglares deberían contribuir.

Si bien la recaudación de un subsidio eclesiástico en Indias (Gil-Bermejo, 1976) tuvo como motivo central captar más recursos de la Iglesia para la siempre necesitada Hacienda Real,⁵ en términos generales Felipe V no obtuvo ni la mitad del dinero esperado, otra cosa sucedió con respecto al equilibrio entre ambos cleros, al menos en cuanto al arzobispado de México se refiere. Tocó al arzobispo Juan Ortega Montañés en 1701, echar a andar el nuevo gravamen en su calidad de delegado papal, empresa que tuvo muchas críticas y le ocasionó fricciones con ambos cleros. Luego de grandes esfuerzos, Ortega logró que la Orden de Santo Domingo y la de San Agustín entregaran una relación global de las rentas e ingresos de sus doctrinas y conventos localizados en el arzobispado de México para poder calcular el subsidio del 10%, absteniéndose de comprobar si los montos eran precisos. Los franciscanos, en cambio, se negaron a entregar cualquier información (Aguirre, 2008a).

Las reacciones del clero regular no se hicieron esperar ante el nuevo gravamen que significaba un paso más para su subordinación a la jurisdicción diocesana, pues además de estar obligados a ceder una parte de sus ingresos a la Corona, también comenzaron una nueva etapa de fricciones con el clero. El breve del subsidio expedido por el papa designó al arzobispo Ortega como delegado papal para la exacción; asimismo, se le enviaron instrucciones minuciosas que se debían seguir para la recaudación. La Corona deseaba salvar

5 La idea de extender el subsidio eclesiástico a las Indias surgió a raíz de la piratería en el Caribe en la década de 1670. Por la escasez de fondos para una armada eficaz, se planteó en el Consejo de Indias que el clero indiano contribuyera con la décima parte de sus rentas. Luego de muchas negociaciones con Roma, puesto que solo el papa podía autorizar un gravamen así, en 1699, Inocencio II otorgó un subsidio más cercano a los deseos de Carlos II, quien ordenó su cobro en las diócesis de los virreinos de Perú y Nueva España, aunque la vida ya no le alcanzó para ver su realización.

cualquier obstáculo que retrasara la recaudación buscando que en dos años se supiera el monto de las rentas de todos los obispados sufragáneos, para saber con qué cantidad y durante cuantos años se debía recaudar el subsidio del millón de ducados, algo que en la práctica no se culminó nunca. Las instrucciones no dejaban mucho margen de acción a quienes se opusieran al subsidio y menos a los obispos, en quienes se concentró la máxima responsabilidad. El asunto no era menor pues se trataba de introducir un nuevo gravamen en el clero indiano.

Con el deceso de Carlos II, la ejecución del subsidio se suspendió, pero en 1701 Felipe V lo retomó y ordenó su pronto cumplimiento, urgido por las necesidades de una incipiente guerra de sucesión. Por ello, no es de extrañar que al poco tiempo de que el primer virrey de Nueva España nombrado por Felipe V, llegara a México, abordase el espinoso asunto del subsidio. En carta de 22 de agosto de 1703, el nuevo virrey le pedía a Ortega: “[...] dar las más prontas disposiciones en la cobranza y recaudación de lo que los bienes de eclesiásticos de esta diócesis deben exhibir por razón del subsidio” (AGN, Bienes Nacionales, leg. 574, exp. 4). Los obispos fueron conscientes de ese ambiente de rechazo que podía ocasionarles muchos dolores de cabeza. En consecuencia, actuaron con cautela, mostrando obediencia a la Corona e internamente una tolerancia selectiva en cada sector del clero. Para el clero en su conjunto, el subsidio fue una señal inequívoca de que su relación con la monarquía estaba cambiando, pues ya no se trataba de dar donativos voluntarios, sino de enfrentar una carga impositiva que temían se repitiera año con año.

No obstante esas expectativas, la mitra hubo de movilizar funcionarios, jueces eclesiásticos y curas para iniciar la recaudación, creándose incluso mecanismos extraordinarios para hacer frente al proceso de recaudación, así como nuevos cargos: un colector general y subcolectores. Pero si Ortega Montañés tuvo tantos retrasos y reparos para recaudar el subsidio de su propio clero, ¿qué podía esperar de los regulares? Todo indicaba que en ese sector las dificultades iban a ser mayores. Las mayores reacciones de los frailes ante el subsidio son de la época del arzobispo Ortega Montañés, entre 1703 y 1708. Cuando a finales de 1703 el arzobispo publicó el edicto

del subsidio en la catedral, luego de airadas protestas e intentos del cabildo eclesiástico por suspenderlo, el clero regular ya estaba listo para hacer frente a la recaudación, agravada para ellos por el hecho de que el delegado papal era el propio arzobispo y por tanto, era a quien tenían que rendirle cuentas para el pago del subsidio. La mitra envió notificaciones a cada orden regular, pidiéndoles una relación jurada de todas las rentas eclesiásticas que disfrutaran para calcular lo que debían pagar de subsidio.

En respuesta, los religiosos decidieron seguir una misma estrategia: solicitar al arzobispo una copia de la bula y de la cédula para alegar en su derecho antes de iniciar cualquier acción concreta dentro de sus provincias. Una semana después de que el arzobispo publicara el edicto, el 9 de octubre de 1703, la Orden de Santo Domingo, la de la Merced, la de San Agustín, la del Carmen y la Compañía de Jesús solicitaron el breve que imponía la obligación de aportar el subsidio a la Corona. Ninguna corporación expresó una respuesta favorable o de rechazo sino de reserva; es decir, expresaron que, antes que nada, querían revisar los papeles para defender, en su caso, sus derechos y privilegios⁶ (AGN Bienes Nacionales, 1703a). El arzobispo Ortega tuvo la misma respuesta: debían entregar de cualquier modo su relación jurada de rentas.

Un año después, en agosto de 1704, la mitra les volvió a reiterar la orden ante su incumplimiento. En el caso de los dominicos, su procurador general, fray Tomás Bravo, pidió al arzobispo los papeles para obedecer conforme “[...] al derecho de dicha mi provincia” (AGN, Bienes Nacionales, 1703b, f. 1)⁷. Ortega se negó también dando los mismos argumentos que a las otras. Como los demás, los dominicos

6 “Año de 1703. El reverendo padre prepósito y vice provincial de la Compañía de Jesús de esta Nueva España sobre pretender se le entreguen los autos hechos por su excelencia, como señor delegado de su santidad, sobre la exacción del subsidio concedido al rey nuestro señor por nuestro santísimo padre Inocencio XII” (AGN, Bienes Nacionales, 1703a).

7 “El reverendo padre procurador del orden del señor Santo Domingo de esta Nueva España sobre pretender se le entreguen los autos hechos por su excelencia como señor delegado de su santidad sobre la exacción del subsidio concedido al rey nuestro señor por nuestro muy santo padre Inocencio XII” (AGN, Bienes Nacionales, 1703b, f. 1).

pidieron más tiempo para poder recibir la información de las doctrinas ubicadas fuera de la ciudad. Ortega les concedió solo dos meses, pero pasó el tiempo y los frailes no daban la relación jurada, por lo que el mitrado, en despacho de 13 de enero de 1705, ordenó notificarles nuevamente aceptando darles algunos meses más. Con los mercenarios sucedió lo mismo⁸ (AGN, Bienes Nacionales, 1703c). Aunque no se localizó el expediente sobre la Orden franciscana, es probable que se repitiera con ella la misma historia.

La actitud renuente del clero regular se sumó a otras protestas presentes en todos los sectores del clero, provocando un mayor desasosiego al prelado quien, no obstante, guardó con los religiosos una política de cierta tolerancia, al darles varios meses para enviar las relaciones juradas y permitirles presentar solo una global por cada orden religiosa. La principal objeción del clero regular era que los réditos que pagaban de censos y capitales, impuestos sobre sus conventos y haciendas, debían rebajarse de sus rentas efectivas y, solo después calcular el diez por ciento del subsidio. Felipe V contestó afirmativamente a esta petición de los religiosos (AGN, Bienes Nacionales, 1703a, f. 3)⁹ agregando que tampoco debían subsidiar aquellas rentas destinadas a limosnas y alimentos, ni aquellas temporales reversibles a seculares. Aun con esto, todo el clero regular retardó lo más que pudo tanto la entrega de sus relaciones juradas de rentas como el pago del subsidio. Sin embargo, el arzobispo siguió insistiendo en emplazarlos a entregar sus cuentas, bajo pena de excomunión. Final-

8 “El reverendo padre procurador del orden de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos de esta ciudad sobre pretender se le entreguen los autos hechos por su excelencia del subsidio concedido al rey nuestro señor por nuestro muy santo padre Inocencio XII” (AGN, Bienes Nacionales, 1703c).

9 “[...] estar comprendidas las sagradas religiones y obligadas a la paga y satisfacción de la décima de sus rentas, frutos, obvenciones y de otros cualesquiera emolumentos que gozaren y percibieren, menos de lo que pagaren de réditos de censos y otras pensiones a que los dichos frutos y rentas fueren obligados, e igualmente estar declarado por su majestad en dicho capítulo séptimo deber pagar la dicha décima de todas las capellanías que en común gozaren las dichas comunidades religiosas proporcionalmente a la renta de cada una” (AGN, Bienes Nacionales, 1703a, f. 3).

mente, entre 1704 y 1705, fueron llegando a la secretaría de cámara y gobierno de la mitra las importantes relaciones, a excepción de la de la Merced, comunidad que todavía en 1721 no la entregaba y se desconoce si en realidad algún día lo llegó a hacer (AGN, Bienes Nacionales, 1703c, f. 19v).

El pago de los religiosos aún se retrasó un tiempo, pero entre 1706 y 1707 habían pagado casi todos. Una vez que las relaciones del clero regular estuvieron en poder del arzobispo las envió al promotor fiscal, Andrés Moreno Bala,¹⁰ para su revisión y dictamen, iniciándose una nueva etapa de fricciones. El promotor fue muy cuidadoso en su tarea, hallando falta de información o inconsistencias en las relaciones. En contraste con los jesuitas, carmelitas, agustinos y mercedarios, la recaudación con los dominicos fue mucho más tersa (AGN, Bienes Nacionales, 1703b)¹¹.

La suma total de rentas de los dominicos en el arzobispado era de 46,422 pesos, según su relación jurada. El promotor fiscal Moreno Bala no puso ninguna objeción a la relación jurada por lo que pronto se les calculó la cifra del subsidio. Se notificó entonces el pago al prior provincial, fray Bartolomé Navarro de San Antonio, lo cual sucedió en agosto de 1705. Los montos del subsidio a las órdenes religiosas en conjunto fueron así:

10 El promotor fiscal era el funcionario encargado de defender la jurisdicción y el derecho de la mitra; durante el proceso del cobro del subsidio, se encargó de asesorar al arzobispo en los conflictos suscitados.

11 “El reverendo padre procurador del orden del señor Santo Domingo de esta Nueva España sobre pretender se le entreguen los autos hechos por su excelencia como señor delegado de su santidad sobre la exacción del subsidio concedido al rey nuestro señor por nuestro muy santo padre Inocencio XII” (AGN, Bienes Nacionales, 1703b).

Tabla 1. Subsidio calculado a cada orden religiosa

Orden	Subsidio asignado (en pesos)
Compañía de Jesús	3,825
San Agustín	7,080
Santo Domingo	4,591
El Carmen	3,484
La Merced	1,400
Total	20,380

Fuente: AGN, Bienes Nacionales.

Si tomamos en cuenta que durante la gestión de Ortega Montañés solo se pudo recaudar en toda la diócesis poco más de 57,000 pesos, como se mencionó antes, la contribución del clero regular fue entonces del 35%, porcentaje muy significativo si se atiende a la fuerte renuencia que no solo los religiosos sino todo el clero en general tuvo para el efecto. Tomando en cuenta que en épocas pasadas, el pleito por el diezmo de las haciendas del clero regular solo se zanjó después de muchas décadas (Brading, 1993, pp. 255-282), el hecho de que en tan solo unos años se le obligara a pagar el subsidio lleva a considerar que la monarquía borbónica y la Iglesia secular no estaban ya dispuestos a aceptar largas resistencias o litigios; los religiosos debían someterse.

Poco después de ser nombrado José Lanciego a la mitra mexicana, recibió instrucciones para retomar el asunto del subsidio y terminar la recaudación. Pero el nuevo prelado consideró necesario hacer primero la visita de su jurisdicción y no sería sino hasta 1719 cuando realmente retomó el asunto. En este se ocupaba cuando en 1723 recibió un breve papal, fechado en 1721, y una cédula de 1722, ordenándole la recaudación de un segundo subsidio, pero ahora por dos millones de ducados de plata (AGN, Bienes Nacionales, leg. 935, exp. 15; y AHAM, Caja 36, exp. 15). Sus responsabilidades aumentaron sensiblemente, pues esta vez él debía iniciar otra recaudación por el doble monto que antes. Ahora, sin embargo, la experiencia de la primera recaudación sirvió para corregir errores de procedimiento y en menos tiempo se terminó con ella.

En días posteriores, en efecto, Lanciego envió instrucciones a 91 jueces diocesanos que actuarían como subdelegados y colectores del subsidio,¹² quienes atendieron tanto los curatos de clérigos como las doctrinas de los frailes, en un despliegue de instancias arzobispaes sin precedentes. Aunque a comienzos del siglo XVIII se permitió a los religiosos presentar en una sola relación las rentas de todos sus conventos y casas, esto cambió con Lanciego, porque cada convento tuvo que rendir cuentas por separado a los jueces diocesanos. Ello demostró a todos que, en la medida en que las instancias arzobispaes estuviesen mejor cimentadas, tanto la mitra como la Corona resultarían favorecidas. No obstante, los conventos de la capital también se habían retrasado en sus pagos, de tal manera que el 9 de junio de 1723, el colector general Llabrés ofreció su renuncia ante la dificultad de su tarea (AGN, Bienes Nacionales, leg. 739, exp. 9). En las provincias, aunque ya nadie cuestionaba la legitimidad del subsidio, varios doctrineros buscaban argumentos para no pagarlo. Entonces, un asesor del arzobispo, el canónigo José de Torres Vergara, emitió una dura opinión contra el clero regular:

[...] en atención a que el padre provincial o su superior no es el cura ministro con quien se debe entender, mandara vuestra señoría ilustrísima se proceda contra dicho cura ministro, que sin embargo de sus respuestas, se le requiera por último apercibimiento de razón íntegramente de la renta que dice tener en arcas reales, y no haciéndolo, proceda contra tal, como contumaz e inobediente a los mandamientos de su santidad. Y solo lo que me resta decir a vuestra señoría ilustrísima es que de lo que este cura ministro

12 Los jueces debían tomar declaración de rentas del clérigo ante notario, tanto de las personales (capellanías, memorias de misas, patronatos laicos) como de obvenciones, fábrica, dotaciones, cofradías y sacristías; para frutos de curatos y doctrinas, debía averiguarse de los libros de bautismo, casamientos y entierros, y complementar con testigos fidedignos de cada parroquia sobre las cofradías y sus ingresos; podían embargar las propiedades y rentas de aquellos individuos renuentes a pagar o defraudadores, hasta que cumplieran; tenían solo dos meses para efectuar todo el proceso de recaudación y el dinero debían remitirlo al colector general Llabrés, quien a su vez lo haría a la caja real.

responde ahora (aun habiendo dado la relación jurada diminuta) y lo pedido por el padre provincial de San Agustín, se esta evidenciando que lo que se intenta por estas sagradas religiones y parece, es excusar el que haya conocimiento del verdadero valor de las doctrinas que administran (AGN, Bienes Nacionales, leg. 739, exp. 9).

Aunque para Felipe V el subsidio fue solo un refuerzo a su frágil hacienda, para la Iglesia indiana significó otras cosas. En primer lugar, el rechazo del clero, sobre todo el regular, a tener que develar sus ingresos, aun y cuando se tratara de hacerlo al interior de la Iglesia, frente a su prelado. Para el clero los subsidios pedidos por Felipe V fueron un aviso claro de que su relación con la monarquía estaba cambiando, pues ya no se trataba de dar donativos voluntarios, sino de enfrentar una carga impositiva que temía fuera permanente. Una consecuencia importante del subsidio fue la movilización de funcionarios, jueces eclesiásticos y curas para intentar llevar a buen término el cometido, y de paso, avanzar en el reforzamiento de la jurisdicción episcopal. Los jueces eclesiásticos actuaron como fiscalizadores que pudieron llegar hasta el último rincón del arzobispado. Además, el proceso recaudatorio sirvió a los arzobispos, sin lugar a dudas, para ponerse al día en cuanto al tamaño de su clero, sus ocupaciones y sus rentas. No fue casual que el arzobispo Ortega Montañés recomendara a los obispos establecer pronto la “planta” de las rentas eclesiásticas, información que podía servir para mucho más que solo el subsidio.

Reforma de misiones y secularización de doctrinas

Luego de terminar su visita pastoral en 1719, el arzobispo José Lanciego expresó al rey haber hallado mucha ignorancia de la doctrina en los indios, y que sus antecesores, ya por viejos o por ocupados en cuestiones políticas, no habían hecho mucho al respecto:

[...] de que resultara la relajación de costumbres, y omisión de los párrocos en el cultivo de esas almas, que por su nativo temperamento

se inclinan al ocio y flojedad [...] contentándose asimismo los ministros con ir a los pueblos a decir su misa sin explicarles la doctrina cristiana ni trabajar en los indios con la perseverancia que necesita la rudeza de su genio...” (Chávez, 1996, p. 206).

Una solución que el pastor creía factible era la de aumentar el número de curas y vicarios y, en cuanto se pudiera, crear entonces más doctrinas y curatos, subdividiendo los partidos más grandes:

Y por cuanto el distrito y pueblos que componen esta parroquia son muchos y no ser bastantes los ministros que al presente hayamos para la cómoda administración de los santos sacramentos, divinos oficios y enseñanza de doctrina cristiana [...] siendo así que la congrua que produce esta administración, según estamos informados alcanza al sustento demás ministros que puedan cumplir con las obligaciones referidas, por tanto, mandamos que dentro de tres meses, primeros siguientes, se pongan los ministros necesarios por nuestro cura ministro de la Villa de Cuernavaca [...] (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 76-76v).

Lanciego emprendió varias acciones tratando de corregir lo que consideró irregularidades en las doctrinas, apoyándose en el virrey Alburquerque, quien tenía la orden expresa del rey de ayudarlo en todo lo que hiciera falta. En Querétaro atendió las quejas de vecinos y clérigos quienes consideraban que los franciscanos desatendían sus obligaciones en la administración espiritual. Al acudir a la Corona, esta decidió que, si bien la doctrina debería seguir bajo los franciscanos, deberían crearse cinco ayudas de parroquia con religiosos fijos para subsanar el problema (AGN, Reales Cédulas Originales, s.f.a, ff. 218-220v). Aunque el virrey y el arzobispo planearon todo para la creación de esas ayudas y se pidió expresamente al provincial franciscano que las erigiera en el transcurso, los religiosos seguían negándose (AGN, Reales Cédulas Originales, s.f.a, f. 220v).

Otro asunto en el que Lanciego insistió fue el de las escuelas de castellano para indios; en 1719 informó al rey que sería de mucha utilidad crearlas verdaderamente y dividir las grandes parroquias para

mayor cercanía de los curas con los fieles. Agregó que esto último podía agilizarse si se pasaba por alto los pareceres que se acostumbraban pedir, y contando solo con la “[...] la consulta que sobre ellos hiciese a mi vice patrón, sin dar lugar a más dilación, porque de lo contrario serían inútiles las grandes incomodidades que había experimentado en las referidas visitas” (AGN, Reales Cédulas Originales, s.f.b). En Madrid, se respondió al arzobispo que, contando con el visto bueno del virrey y de acuerdo al Concilio de Trento, podía erigir las escuelas y parroquias que tuviere por convenientes. Contando con este respaldo, Lanciego intentó entonces reordenar varias parroquias y misiones a cargo de frailes, así como asignar clérigos en las doctrinas vacantes como vicarios (AHAM, Clero Secular y Regular, s.f., f. 22).

Las misiones del norte del arzobispado también ocuparon la agenda del activo prelado, buscando su conversión a doctrinas del clero secular como del regular, de las cofradías y obras pías para poder ejercer más atribuciones. En consecuencia, el arzobispo le propuso al virrey, en 1720, decretar la conversión de las misiones en doctrinas, para seguir todos los requisitos de presentación de ministros (AHAM, Clero Secular y Regular, s.f., f. 197). El virrey asintió y así lo ordenó. Aunque no se conoce la opinión precisa del provincial, es seguro que se negó al cambio de régimen, pues en informes de 1743 todavía aparecían como misiones los establecimientos franciscanos de esa zona. En ese año, un alcalde mayor opinó que Valles, por ejemplo, ya no debía ser considerada misión debido a que “[...] hace más de 150 años que dichos naturales y sus ascendientes gozan y gozaron del nombre cristiano” (De Solano, 1988, p. 519). La composición de la población así lo reflejaba también, pues mientras solo había 75 familias de indios, en cambio, ya estaban asentadas 242 de españoles, pardos y mulatos. Los casos anteriores demuestran que Lanciego no pudo conseguir mucho en cuanto a la conversión de misiones en doctrinas o en la colocación de clérigos seculares como vicarios de doctrineros.

Después de casi una década en el arzobispado, de haber recorrido buena parte de su territorio, de conocer de cerca a los dos cleros, sus alcances y sus limitaciones, así como haber intentado dividir doctrinas, nombrar más clérigos seculares como vicarios y convertir misiones en doctrinas, Lanciego se aprestó a una reforma de mayores alcances: el

traspaso de sesenta doctrinas al clero secular. En 1721, el arzobispo envió a su secretario, José Ansoain y los Arcos, como procurador a Roma, para tratar los asuntos de las doctrinas, especialmente la secularización de sesenta de ellas. En España, se examinaron las instrucciones que el procurador llevaba. Lanciego escribió una carta al papa en la cual, de manera sumaria, le explicaba la situación del clero del arzobispado y la solución a sus problemas:

[...] en dicho arzobispado de México hay un número suficientísimo de sacerdotes hasta en cantidad de ciento y diez y siete [...] siendo la mayor parte de ellos de suma capacidad y doctrina, doctores en los sagrados cánones y profesores de la sagrada teología, los cuales, además de ser muy pobres, no pueden conseguir beneficios eclesiásticos para su decente manutención por razón de que casi todas las prebendas, beneficios y curatos se administran por tres solas religiones, a saber: por los de Santo Domingo, veinticinco; por los de San Francisco de la observancia, setenta y tres; y por los de San Agustín, cincuenta y uno; que en todo hacen la cantidad de ciento y cuarenta y nueve [...] se suplica a vuestra santidad se sirva por lo menos minorar a los dichos regulares el número de las susodichas parroquias, mandando que, como vayan vacando se den a los sacerdotes seculares, y si bien pareciese a vuestra santidad, a los de Santo Domingo, que tienen veinte y cinco se podrán quitar diez; a los de San Agustín, que tienen cincuenta y uno, veinte; y a los de San Francisco, que tienen setenta y tres, treinta (AGI, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 1722-1724).

Esta propuesta provocó gran molestia en Madrid porque, al parecer, Lanciego omitió consultarlo a detalle con el rey. En Roma, el procurador quiso discutir también si la posesión de las doctrinas por los regulares aún tenía razón de ser, por un lado, y fijar los alcances que los obispos debían tener en el conocimiento de los frailes al frente de la administración de sacramentos, de su movimiento de una a otra comunidad religiosa y de las cofradías de doctrinas, por el otro (AHNE, Diversos-colecciones, s.f.). Tales temas no eran nuevos en la Nueva España; lo realmente nuevo era que un obispo negociara directamente

en Roma la salida de los regulares de las doctrinas, pues como se sabe, los monarcas españoles tradicionalmente eran renuentes a permitir una intervención directa del papado en Indias, y Felipe V no fue la excepción. Contando con esto, los franciscanos, con amplia experiencia luego de dos siglos de luchar por conservar las doctrinas, impidieron que el negocio fuera a más.

A fin de cuentas, el intento de Lanciego en Roma terminó sin éxito inmediato, pues a la Corona le importó más cerrar cualquier fisura en el patronato de la Iglesia indiana. El trance antes descrito demostró que los frailes todavía podían incidir en Madrid a su favor, que aún podían evitar la siempre temida secularización de sus doctrinas y que Felipe V no se atrevería a impulsarla, temeroso quizá de provocar cambios que pudiera salirse de control. Por otro lado, pudo haber influido también el recelo con que se vio la relación del clero peruano, en donde claramente se ponía al papa por arriba del rey en las cuestiones eclesiásticas indianas (Moreno, 2003, p. 261). No obstante, el intento secularizador del arzobispo Lanciego tuvo consecuencias, no a corto sino a mediano plazo, por cuanto ayudó a poner nuevamente en la agenda de la monarquía borbónica la discusión sobre la excepcionalidad de la iglesia de los regulares en Indias.

Los jueces diocesanos y los doctrineros

Los jueces eclesiásticos, dependientes del arzobispado, también jugaron un papel importante en cuanto a una mayor sujeción de las doctrinas a la mitra durante la época aquí estudiada. Luego de intentos parciales en gestiones arzobispales anteriores por establecer un cierto número de jueces diocesanos territoriales, Lanciego fue perseverante en impulsar a los suyos en toda su jurisdicción, y en especial en las doctrinas de religiosos. Ya desde 1715, durante su visita, Lanciego estuvo atento a fortalecer a sus jueces (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 30v). Pero no solo ello, sino que también comenzó a reorganizar los límites territoriales de cada juez, buscando una mayor eficiencia y control jurisdiccional. La política de Lanciego fue clara, si los frailes ejercieran

alguna jurisdicción en el futuro, debería ser solo la que la mitra les permitiera (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 206v).

En 1721, como respuesta a las quejas del arzobispo acerca de que los religiosos impedían el pleno ejercicio de su jurisdicción y alteraban la paz “[...] en perjuicio de las regalías y autoridad de su mitra” (AGN, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23), Felipe V ordenó hacer cumplir una cédula de 1701 que obligaba a los obispos visitar sus obispados y nombrar jueces y vicarios. Con este respaldo, el arzobispo designó jueces eclesiásticos para todos los rincones de su distrito. Así, a principios de 1723, con ocasión de cumplir con la recaudación del segundo subsidio eclesiástico, Lanciego envió instrucciones a 91 jueces, incluyendo a doce que solo tenían jurisdicción sobre doctrinas de religiosos (AHAM, Caja 36, exp. 15).¹³ Ese pequeño ejército de la mitra actuó como brazo ejecutor de las órdenes del monarca y de su prelado, recibiendo incluso una compensación económica por sus tareas de recaudación del subsidio (AGN, Bienes Nacionales, leg. 739, exp. 12).

Dentro de las prerrogativas de los jueces locales estaban las de: oír, conocer, juzgar y sentenciar, tanto causas civiles de “moderada suma”,¹⁴ como criminales “leves” entre indios (AGN, Bienes Nacionales, leg. 992, exp. 18). También debían conocer las causas en defensa de la inmunidad eclesiástica, así como conocer de cualquier dispensa presentada para matrimonio y enviarla al ordinario para su revisión. Igual, era el encargado de despachar las licencias para que una pareja pudiera casarse (AGN, Bienes Nacionales, leg. 1030, exp. 1). El juez también debía ser el ejecutor local de todos los autos y decretos del ordinario y la duración de su nombramiento sería a “voluntad” del arzobispo.

Hubo, por supuesto, resistencias del clero regular al aumento del poder de la mitra mediante sus jueces. Un asunto que provocó disputas fue el de las licencias matrimoniales, aunque estaba claro que el

13 Los jueces de doctrina eran de: Chalco, Cuernavaca, Meztitlán, Apa, Actopan, Ixmiquilpan, Tulancingo, Cadereyta, Querétaro, Toluca, Texcoco, Valle de Amilpas y Tochimilco.

14 Reservándose para el ordinario las causas beneficios, matrimoniales y criminales, en cuyo caso solo debía levantar informaciones con testigos y enviarlas a la mitra.

regularlas correspondía al juez diocesano, varios doctrineros lo pasaban por alto y ellos daban el permiso, ganando tanto el pago del derecho como más autoridad ante su feligresía (AGN, Bienes Nacionales, leg. 1016, exp. 9). No faltaron tampoco conflictos de abierto desafío a la autoridad de los jueces por parte de los ministros de doctrina. En 1721, el juez eclesiástico de Chiapa de Mota, luego de varios roces con los frailes del convento de Aculco por cuestiones de jurisdicción,¹⁵ consiguió del arzobispo Lanciego la autorización para leer y pegar un edicto en las puertas del convento:

[...] a fin de exhortar, amonestar y mandar a los vecinos y moradores de dicho partido de cualquier estado y condición que fuesen, el que las demandas, acusaciones y querellas tocantes al fuero eclesiástico se deben poner, tratar y seguir tan solamente ante vuestra señoría ilustrísima, sus provisores vicarios generales o dicho juez eclesiástico, como a quienes toca el conocimiento de ellas, y que de ninguna manera acudiesen con dichas demandas, acusaciones ni querellas ante la justicia secular ni ante ningún eclesiástico secular o regular, en cualquier preeminencia o ministerio que se hallase constituido de cura ministro de doctrina interino, coadjutor o ayudante, por ser visto no pertenecer a ninguno de las sobredichas causas eclesiásticas que tocan al fuero contencioso (AGN, Bienes Nacionales, leg. 1285, exp. 23).

El hecho de haber instituido juzgados eclesiásticos que cubrían todos los pueblos del arzobispado, bajo administración clerical o de religiosos, fue todo un logro para los arzobispos de la primera mitad del siglo XVIII, aun y cuando los frailes doctrineros siguieran intentando

15 Según el juez de Chiapa de Mota, los regulares se entrometían y usurpaban la “[...] jurisdicción eclesiástica, propasándose a querer conocer, tratar y seguir en fuero contencioso las causas pertencientes a ella, a si la justicia secular, como algunos eclesiásticos regulares, sin haber bastado para estos, repetidas notificaciones que en virtud de decreto, así de dicho señor ilustrísimo y reverendísimo arzobispo, como de su provisor y vicario general se les han hecho, para que se abstengan de cometer semejantes excesos”.

ignorar o disminuir su autoridad. Sin embargo, la vigilancia de los jueces logró una mayor sujeción de las doctrinas. Por primera vez en dos siglos, en la década de 1720, los arzobispos de México tuvieron representantes de su jurisdicción en prácticamente todas las parroquias. El proceso había sido largo, pero finalmente tuvo su culminación en la época de Felipe V, a tono con el nuevo trato del primer monarca borbón a las cuestiones eclesiásticas indianas.

El control de las cofradías

El asunto de las cofradías y hermandades asentadas en las doctrinas, también fue abordado por la mitra, sobre todo en la gestión de Lanciego, quien tuvo como política apartar a los frailes de todo ejercicio jurisdiccional en el arzobispado. De hecho, prohibió a los frailes tener cargos en la cofradía “[...] que de ninguna manera se elija por rector ni mayordomo de ninguna de las cofradías al padre vicario ni cura ministro ni otro religioso alguno, por ser de las personas prohibidas por derecho para la obtención de semejantes cargos en cofradías como la presente” (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 120). En cambio, puso al frente de las cofradías a sus jueces para regular incluso la petición de limosnas de cofradías foráneas a los pueblos:

[...] por lo tocante a cofradías, mandamos que nuestro juez eclesiástico conozca de todas las que hubiere, así en el distrito de esta parroquia como de las Iglesias que se hallaren dentro del que comprende el título que le tenemos despachado, ora sean de españoles, indios, mestizos, mulatos o cualquier género de castas. Y por cuanto suelen venir algunas licencias para demandar limosna para algunas cofradías de las fundadas en este nuestro arzobispado, declaramos deberse presentar las que a esta villa llegaren ante dicho nuestro juez eclesiástico (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 43v).

El manejo de los recursos fue otro renglón destacado en la visita de Lanciego, exigiendo a los jueces diocesanos su vigilancia, el cumplimiento estricto de sus constituciones y evitar gastos en beneficio de

los doctrineros (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., ff. 24-24v). Aún más, fue cuidadoso en revisar y derogar aquellas constituciones de cofradías que dieran alguna autoridad a los religiosos, en detrimento de la jurisdicción ordinaria de la mitra (AHAM, Lanciego y Eguilaz, s.f., f. 25). Por lo que respecta al subsidio eclesiástico, la recaudación en las cofradías y hermandades de las doctrinas fue otro asunto del que se hicieron cargo también los jueces eclesiásticos, nombrados colectores por la mitra. La recaudación profundizó las diferencias entre la mitra y el clero regular, dada la firmeza del arzobispo para fiscalizarlas, pues había provincias enteras en que solo los frailes habían tenido control y conocimiento de esas asociaciones de fieles.

Francisco Javier de Velasco, cura de Churubusco, fue comisionado en 1705 por la mitra para cobrar el subsidio en las doctrinas dominicas de: Coyoacán, San Jacinto, Mixcoac, Tacubaya y Tlalpan, además de las franciscanas de Tepepan y Xochimilco, todas ellas localizadas en el poniente y sur del valle de México. En Mixcoac, específicamente, “[...] pasé al pueblo de Santo Domingo Mixcoac, donde hice notoria dicha comisión al padre fray Isidro Ceballos, ministro de dicho pueblo, para que hiciese comparecer ante mí a los mayordomos de las cofradías y hermandades, quienes comparecieron”¹⁶ (AGN, Bienes Nacionales, leg. 218, exp. 10, f. 14). Al final de su encomienda, y una vez que envió a la mitra todas las diligencias por escrito, el juez Velasco cerró con el siguiente balance, sobre los frailes, su informe: “[...] han costado algún trabajo, no siendo el menor algunas controversias y argumentos que se han ofrecido con algunos prelados de los regulares doctrineros, aunque si bien en este punto me han sobrado soluciones con que convencerlos” (AGN, Bienes Nacionales, leg. 218, exp. 10, f. 18). En la provincia de Chalco, en donde solo había doctrinas, sucedió

16 “Autos y diligencias que remite el cura vicario del pueblo de San Mateo Huitzilopochco a la secretaría de cámara y gobierno del excelentísimo señor doctor don Juan de Ortega Montañés, dignísimo arzobispo de México, del consejo de su majestad que Dios Guarde, con razón y relación jurada clara y distinta y separadamente de todas las rentas de las cofradías, capellanías, dotaciones, donaciones y otras obras pías, para que por ellas se regule la décima para el subsidio caritativo por su santidad, concedido al rey nuestro señor, etc. Mayo 12 de 1705 años” (AGN, Bienes Nacionales, leg. 218, exp. 10, f. 14).

algo similar, con la diferencia de que aquí el juez eclesiástico designado para el subsidio, Juan Félix Ramírez Ponce de León, actuó con un estilo más impositivo. Este juez hizo llegar la siguiente notificación a todos los conventos de la citada provincia:

[...] mandaba y mandó se notifique a los padres ministros de doctrina de esta provincia que dentro de seis días primeros siguientes a la notificación presenten ante dicho juez eclesiástico relaciones juradas en toda forma en que cada uno en particular exprese las cofradías, congregaciones o hermandades que con las iglesias de su doctrina hubiere y asimismo las rentas que dichas cofradías, congregaciones y hermandades tuviesen de imposiciones y dotaciones o de otra cualquier manera y la aplicación y distribución de dichas rentas, como también declaren en dichas relaciones juradas los demás emolumentos y obvenciones no fijas pertenecientes a dichas cofradías, congregaciones y hermandades que/ hubiere habido en los cinco años antecedentes hasta el pasado de setecientos y cuatro inclusive, con apercibimiento que no lo haciendo se procederá a lo que hubiere lugar por derecho y así lo proveyó y firmó.¹⁷ (AGN, Bienes Nacionales, 1705, ff. 61v-62).

En los días subsiguientes, en efecto, los doctrineros fueron presentando la información requerida de las jurisdicciones franciscanas (Tlalmanalco, Chalco Atenco, Temamatla y Ozumba), agustinas (Mixquic, Aytozingo y Chimalhuacán Chalco) y dominicas (Tenango Tepopula, Iztapaluca, Juchitepec, Amecameca y Tlahuac). Si bien los religiosos no fueron separados de esa responsabilidad, la mitra dejó muy claro que debían obediencia a sus jueces eclesiásticos.

17 Año de 1705: “Autos hechos en virtud de despacho del ilustrísimo y excelentísimo señor don Juan de Ortega Montañés, arzobispo de México, del consejo de su majestad, etc., para la inquisición de las rentas fijas y emolumentos de las cofradías, congregaciones y hermandades de la provincia de Chalco. Juez: el licenciado don Juan Félix Ramírez Ponce de León, calificador del santo oficio de la Inquisición de esta Nueva España y su comisario en dicha provincia de Chalco, juez eclesiástico y vicario in capite en ella” (AGN, Bienes Nacionales, 1705, ff. 61v-62).

Cierre

En la primera mitad del siglo XVIII, se vivió un cambio en la vida eclesiástica del arzobispado de México que cambió el equilibrio de poder entre ambos cleros, a favor del secular. No hubo una ruptura brusca sino más bien una reorientación firme que adquirió fuerza con los años. Felipe V exigió a virreyes y arzobispos actuar conjuntamente, sin divisionismos, en los cambios ordenados y en el cobro del subsidio; todo indica que así lo hicieron. Esa transición tuvo como consecuencias más visibles el apogeo arzobispal sobre las órdenes religiosas, la consolidación de su autoridad por todo el territorio arzobispal y la subordinación de las doctrinas; igualmente, un reforzamiento inusual del Real patronato y la imposición de una nueva forma de ejercerlo, menos negociadora y más ejecutiva. Felipe V dejó claro que la Iglesia debía ser más cooperativa con la Real Hacienda; aunque el clero regular resistió de varias maneras, ya no hubo marcha atrás.

De los dirigentes eclesiásticos de esta época, sin duda destaca el arzobispo José Lanciego Eguilaz por su tendencia a promover a su clero y por buscar soluciones de fondo. En efecto, Lanciego fue el prelado más sensible a las necesidades de su clerecía y, en consecuencia, quien más intentos hizo por reducir los espacios de los regulares a favor de los clérigos seculares; reforzó la autoridad de los jueces eclesiásticos, creando con ello más empleos; propuso convertir las misiones en doctrinas para tener más control de ellas; favoreció la división de curatos y doctrinas; y finalmente, intentó la secularización de sesenta doctrinas. Esta última acción es de especial importancia porque si bien el intento no prosperó, volvió a poner en la agenda real el asunto, sobre todo el argumento de que el rey podía en cualquier momento elegir entre frailes y clérigos para ocupar las parroquias de Indias. A fin de cuentas, el clero secular, por depender en mucho mayor medida del Real patronato que el regular, fue favorecido, pues con ello la monarquía española creaba mejores condiciones para tener un mayor provecho de las iglesias indianas.

En cuanto al arzobispado de México es claro que obtuvo varios beneficios también. En primer lugar, ganó primacía y preferencia de la Corona frente al clero regular, en especial su apoyo para consolidar

la red de jueces eclesiásticos en todo el territorio diocesano a raíz del cobro del subsidio. En segundo lugar, la mitra pudo conocer de primera mano la magnitud de las rentas de los religiosos, su composición y su manejo, con lo cual pudo valorar mejor la situación económica del clero secular, especialmente el de las parroquias en comparación con las doctrinas. La certeza de que estas últimas gozaban, en promedio, de mayores ingresos que los curatos diocesanos, influiría más adelante en el proyecto del arzobispo José Lanciego Egulaz para secularizar sesenta doctrinas, bajo la justificante de compensar a un clero secular pobre y sin beneficios. Pero además, cuando a este mismo prelado tocó el turno de continuar con la recaudación del subsidio se enfrentó ya a una menor resistencia de los conventos y órdenes religiosas que su antecesor. Sin duda, todo esto contribuyó también a minar el antiguo poderío de los frailes.

Por lo que respecta al establecimiento del subsidio eclesiástico, el clero regular intentó oponerse aunque sin éxito. El monarca puso en claro y reafirmó siempre que tuvo ocasión, que sus decretos debían cumplirse sin importar el tiempo que transcurriese y que tenía el poder para obtener de Roma más concesiones pecuniarias a costa de toda la renta eclesiástica de cada diócesis. Aún más, Madrid mostró a los religiosos que ya no valían los recursos de fuerza ante la audiencia, instancia que fue separada totalmente de cualquier jurisdicción sobre el asunto. Si en épocas anteriores fue así, eso estaba cambiando también. Finalmente, la Corona se inclinó por completo a favor de la autoridad y jurisdicción de los obispos, buscando conseguir sus propios objetivos, todo ello en detrimento del poder tradicional de los religiosos. Así, el hecho de que la instrumentación del cobro del subsidio haya quedado a cargo de la mitra y sus ministros, puso las condiciones para que la primera pudiera fiscalizar las rentas del clero regular sin que los religiosos tuvieran argumentos o justificantes para rechazarlo. Luego de un rechazo inicial de los frailes al gravamen, la experiencia de los arzobispos y el cierre de filas con el virrey y la Real Audiencia no dejaron más opción al clero regular más que presentar sus ingresos y pagar el subsidio.

Referencias

Fuentes primarias

AGN (Archivo General de la Nación), México.

De Soto, F. S. (1676ca). *Fray Sebastián de Soto, procurador general de la provincia de Santiago de México*, Orden de Predicadores, en 1676. (Clero regular y secular, 150, exp. 1, ff. 68-68v).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 500, exp. 1).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 574, exp. 4).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 935, exp. 15).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 739, exp. 9).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 1285, exp. 23).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 739, exp. 12).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 992, exp. 18).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 1030, exp. 1).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 1016, exp. 9).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 1285, exp. 23).

Bienes Nacionales. (*Bienes Nacionales*, leg. 218, exp. 10).

Bienes Nacionales. (1703a). (*Bienes Nacionales*, leg. 859, exp. 45).

Bienes Nacionales. (1703b). (*Bienes Nacionales*, leg. 218, exp. 5).

Bienes Nacionales. (1703c). (*Bienes Nacionales*, leg. 218, exp. 6).

Bienes Nacionales. (1705). (*Bienes Nacionales*, leg. 218, exp. 10-A).

Reales Cédulas Originales. (s.f.a). (*Reales Cédulas Originales*. vol. 39, exp. 85).

Reales Cédulas Originales. (s.f.b). (*Reales Cédulas Originales*. vol. 41, exp. 23).

AGI (Archivo General de Indias). Sevilla.

Cartas y expedientes de personas eclesiásticas. (1722-1724). *Cartas y expedientes de personas eclesiásticas del distrito de aquella audiencia*. Años de 1722 a 1724 (México, leg. 703).

AHNE (Archivo Histórico Nacional de España). Madrid.

Diversos-colecciones. (s.f.). (*Diversos-colecciones*, leg. 37, núm. 25). Archivo Histórico Nacional de España, Madrid.

AHAM (Archivo Histórico del Arzobispado de México). México.

Lanciego y Eguilaz, J. (s.f.). Libro de visita del arzobispo José Lanciego y Eguilaz. (Caja 20, libro 2). “Clero Secular y Regular”. (s.f.). (Clero Secular y Regular, vol. 93).

(Caja 36, exp. 15). Archivo Histórico del Arzobispado de México.

Fuentes secundarias

Aguirre, R. (2000). El ascenso de los clérigos de Nueva España durante el gobierno del arzobispo José Lanciego y Eguilaz. *Estudios de Historia Novohispana*, (22): 77-110.

Aguirre, R. (2008a). El arzobispo de México, Ortega Montañés y los inicios del subsidio eclesiástico en Hispanoamérica, 1699-1709. En Cervantes, F., Tecuanhuey, A., Martínez, M. (Coords.). *Poder civil y catolicismo en México. Siglos XVI-XIX*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México.

Aguirre, R. (2012). *Un clero en transición. Población clerical, cambio parroquial y política eclesiástica en el arzobispado de México, 1700-1749*. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM.

Aguirre, R. (2011). Más allá de los altares. Un obispo de Felipe V frente al régimen de ingresos parroquiales en Yucatán, 1715-1728. *Hispania Sacra*, 63(128): 469-499.

Aguirre, R. (2013-2014). Frailes a la defensiva: la imposición del subsidio eclesiástico en el arzobispado de México a principios del siglo XVIII. *Letras Históricas*, (9): 43-71. Universidad Santo Tomás.

Barrio, M. (2002). El clero bajo sospecha a principios del siglo XVIII. El informe de Macanaz y la respuesta de los obispos. *Investigaciones Históricas*, (22): 47-62.

Brading, D. (1993). *Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Chávez, E. (1996). *Historia del Seminario conciliar de México*. (T. 1). México: Porrúa.
- Cortés, A. (2004). La iglesia y el cambio dinástico. En Serrano, E. (ed.). *Felipe V y su tiempo*. (Vol. 1). Zaragoza: Instituto “Fernando el Católico”.
- De Solano, F. (ed.). (1988). *Relaciones geográficas del arzobispado de México*. (Vol. 2). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Gil-Bermejo, J. (1976). La Iglesia y defensa de las Indias. *Anuario de Estudios Americanos*, (33): 343-383.
- Hausberger, B., y Mazín, O. (2010). *Nueva España: los años de autonomía. En Nueva Historia General de México*. México: El Colegio de México.
- Jalpa, T. (2008). *Tierra y sociedad. La apropiación del suelo en la región de Chalco durante los siglos XV-XVII*. México: INAH.
- Macanaz, M. (1841). *Pedimento del fiscal general don Melchor de Macanaz sobre abusos de la Dataría; provisión de beneficios; pensiones; coadjutorías; dispensas matrimoniales, espolios i vacantes; sobre el Nuncio; derechos de los tribunales eclesiásticos; juicios posesorios y otros asuntos gravísimos*. Granada: Imprenta de Benavides. En línea: <http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/6213>.
- Moreno, A. (2003). El regalismo borbónico frente al poder vaticano: acerca del estado de la iglesia en el Perú durante el primer tercio del siglo XVI-II. *Revista de Indias*, 63(227): 223-274.
- Pujol, J. (1995). El clero secular al servicio del Estado. Intento estatal de control de la Iglesia durante la guerra de sucesión. *Revista de Historia Moderna*, (13-14): 73-93.
- Rouco, A. (2001). *Estado e Iglesia en la España del siglo XVI*. Madrid: Facultad de Teología “San Dámaso”.
- Serrano, E. (Ed.). (2004). *Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional*. Zaragoza: Instituto “Fernando el Católico”.